



**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.
QUEJOSA:**

EXPEDIENTE: *****

**MAGISTRADO PONENTE:
JESÚS DE ÁVILA HUERTA.**

**SECRETARIA:
JACQUELINE MOLINA GONZÁLEZ.**

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de sesión de seis de noviembre de dos mil diecinueve.

V I S T O S, los autos para resolver el toca de amparo directo número **239/2019**; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ***** , por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, por considerar violados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales, contra el acto de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal

AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.

2

Federal de Justicia Administrativa, que hizo consistir, en la sentencia de doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente número *****.

Por acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, la magistrada instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente tuvo por recibida la demanda de amparo; ordenándose el emplazamiento a la autoridad tercera interesada, por conducto de la encargada de su defensa jurídica, con las copias exhibidas por el quejoso; realizándose tal notificación por medio de boletín jurisdiccional, el veintinueve de abril del año en cita (foja 47 y 48 del juicio de nulidad).

SEGUNDO.- Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo presidente, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, admitió la demanda de mérito, que se registró con el número 239/2019; ordenó dar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde, quien presentó el alegato número 628/2019 del que no se desprende que haga valer causales de improcedencia, solicitando se declararan inoperantes los conceptos de violación (foja 30).

TERCERO.- Por acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, se turnó el asunto al Magistrado Jesús de Ávila Huerta, para la elaboración del proyecto de resolución.

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****3**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSIDERANDO:**PRESUPUESTOS PROCESALES**

PRIMERO.- Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos siguientes:

Constitucionales: 107, fracciones V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamentarios: 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, éstos de la Ley de Amparo.

Orgánicos: 37, fracción I, inciso b), y 38, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Acuerdos Generales: Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 33/2014, del mismo órgano.

Vía, materia y territorio: El acto reclamado lo constituye una resolución definitiva dictada, por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en el Tercer Circuito en el que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción, en asuntos en materia administrativa.

SEGUNDO.- Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estimó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales.

TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con los autos originales del juicio de nulidad número *********, que remitieron el Magistrado Presidente de la Tercera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Secretario de Acuerdos, al rendir su informe.

CUARTO.- Legitimación. El juicio de amparo fue promovido por **parte legítima**, toda vez que el escrito inicial de demanda fue signado por *********, por su propio derecho, ya que la sentencia que impugna le resultó adversa.

QUINTO.- Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia que constituye el acto reclamado, le fue notificada a la parte quejosa mediante boletín jurisdiccional el seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 161 del juicio de nulidad), notificación que surtió efectos al tercer día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tanto el término inicio a correr a partir del doce de agosto de dos mil diecinueve y concluyó el treinta de agosto siguiente, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de agosto del año en cita, que fueron inhábiles en términos de lo dispuesto por el

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****5**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

artículo 19 de la Ley de Amparo, por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintisiete de agosto del presente año, esto es al décimo segundo día, su presentación fue oportuna.

SEXTO.- Contenido del fallo reclamado y conceptos

de violación. Se tiene por reproducida la sentencia reclamada, de la que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, sin que resulte necesaria su transcripción conforme a la jurisprudencia aplicable por analogía de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", cuyo texto y datos de localización se citan enseguida; igualmente se dan por transcritos los conceptos de violación planteados en su contra, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las resoluciones, no prevé que se reproduzcan, ni existe precepto legal alguno que disponga esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo resulta innecesaria su transcripción, toda vez que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate derivados del escrito de expresión de los conceptos de violación, los cuales deben ser estudiados y dárseles la respuesta oportuna,

misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, formulados en el escrito relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.

Apoya lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia clave 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el referido Semanario y su Gaceta, pero en el tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, que dice: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****7**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." [Época: Novena Época.- Registro: 164618.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXXI, Mayo de 2010.- Materia(s): Común.- Tesis: 2a./J. 58/2010.- Página: 830].

SÉPTIMO.- Fundamentos, motivos y estructura del

fallo. Artículo 74 de la Ley de Amparo. "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III. La

AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.

8

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.".

En esa medida, a continuación se expresan los fundamentos y motivos que apoyarán el presente fallo bajo la

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****9**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

base estructurada del numeral transcrito.

OCTAVO.- Estricto derecho.

El artículo 107 de la Carta Magna Federal establece:

"Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. (...) II. (...) En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria."

Principio constitucional que aparece reflejado en sentido contrario al prever de manera excepcional al de suplencia de la queja a los casos expresamente referidos en la Ley Reglamentaria, el cual rige al juicio de amparo y que consiste en que la sentencia se dicte en el juicio de amparo, el Tribunal de la Federación únicamente deberá tomar en consideración los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda o los agravios expresados por el recurrente, al promover un medio de impugnación, sin poder comprender otras cuestiones que no fueron alegadas vía conceptos de violación o agravios.

De esta forma, se tiene que el principio de estricto derecho estriba en que el juez de amparo debe concretarse a

examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación que se expresen en la demanda, y si se trata de resolver un recurso interpuesto contra la resolución pronunciada por el juez de distrito, en que el revisor se limite a apreciar tal resolución tomando en cuenta, exclusivamente, lo argüido en los “agravios”.

No podrá, entonces, el órgano de control constitucional, realizar libremente el examen del acto reclamado ni de la resolución recurrida, pues debe limitarse a establecer, respectivamente, si los citados conceptos de violación o, en su oportunidad, los agravios, son inoperantes. De manera que no estará legalmente en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Carta Magna, por un razonamiento no expresado en la demanda; ni que la sentencia o resolución recurrida se aparta de la ley, por una consideración no aducida, ya en los conceptos de violación, ya en los agravios respectivos.

En virtud de este principio, puede ocurrir que, no obstante el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la justicia federal solicitada, por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo, conducente a aquella conclusión; y también que, siendo ostensiblemente ilegal la resolución recurrida, deba confirmarse por no haberse expuesto el agravio apto que condujera a su revocación.

Así el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, para lo

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****11**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que al caso interesa, establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; [...] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o

marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.”.

El alcance que se ha fijado respecto de ese principio en la materia que nos ocupa aparece definido en la jurisprudencia que dice: Tesis: 1a./J. 17/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XII, Octubre de 2000, Pág. 189, Jurisprudencia (Administrativa).

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****13**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado.”

En esa medida los planteamientos de la parte quejosa, se analizarán bajo las condiciones anotadas.

NOVENO.- Derechos fundamentales en la vía constitucional.

Artículo 14 Constitucional.

Contiene el derecho fundamental al **debido proceso**, que envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental en el orden jurisdiccional, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.

El **debido proceso**, contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Fundamental implica:

- a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento.
- b) Derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes.
- c) Oportunidad de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes, vinculados con la cuestión de que se trate.
- d) Derecho para hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas.
- e) Notificación adecuada de la decisión que se dicta y de los motivos en que ella se funde y,
- f) Derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.

También se ha dado a conocer como la **garantía de audiencia**, que consiste en dar al gobernado la oportunidad de

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****15**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”, ya descritas que son las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación.

Luego, en el juicio de amparo directo la verificación del cumplimiento de las exigencias referidas en el proceso jurisdiccional, implica, entre otras cosas constatar:

- a. Que no hubiere abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.
- b. Que no se diera la incompetencia.
- c. La inadecuación del procedimiento que quebrante las formas esenciales del juicio, ya sea en el proceso mismo (violaciones procesales) o por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o laudo (violaciones formales), entendidas como aquellas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, se haya producido indefensión para la parte.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia y tesis de los rubros siguientes: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.” (Tesis: P./J. 47/95. Instancia: Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo II, Diciembre de 1995. Página: 133). "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN." (Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II. Página: 1112).

Artículo 16 Constitucional.

A la par de las diversas cualidades del **debido proceso** contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la **garantía de audiencia**, en su versión formal, aparece el de **legalidad** en el dictado de la sentencia o laudo.

Este implica obligar al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****17**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Esta configuración del **debido proceso** a cargo del juzgador aparece vinculada y reforzada por lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de **fundar y motivar debidamente** los actos que emitan, lo que implica que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, ello en atención al principio de la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, de la Carta Magna, que hace indiscutible que las resoluciones que emitan deben cumplir con los derechos fundamentales de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, ese aspecto se colma a partir de que la sentencia o laudo, contenga el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir:

1. El estudio de las acciones y excepciones del debate.
2. El apoyo en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión.
3. La exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además,

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Tiene explicación lo anterior en la jurisprudencia del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." (Tesis: 1a./J. 139/2005.

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXII, Diciembre de 2005. Página: 162).

Exacta aplicación de la norma como debido proceso.

Un diverso ángulo bajo el cual deben verse ambos preceptos fundamentales, que complementa el **debido proceso**, está en el concepto de la **exacta aplicación de la ley**, cuya transgresión se da cuándo:

- Su aplicación no configure o contenga la norma o regla que rija el caso cuestionado;
- Cuando se le dé un alcance que no tiene;
- Por falta de aplicación de un dispositivo, siempre que éste deba servir de fundamento a la resolución de un negocio, en virtud de haber prevención al respecto, y;
- En caso de indebida interpretación de un artículo, si el juzgador se aparta de la esencia que contiene, tomándola en

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****19**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sentido diverso al que prevé, o contrario a los principios generales de derecho o a las reglas de la hermenéutica jurídica.

Así, se desprende en esencia de la tesis del rubro siguiente: "**LEYES, INFRACCIÓN DE LAS.** La infracción a las leyes se opera ya por inexacta aplicación, ya por falta de aplicación o ya por dárseles una interpretación contraria a la idea que privó en el legislador al dictarla, o a las reglas generales de derecho; debiendo entenderse jurídicamente, que existe inexacta aplicación de un precepto legal, cuando éste no sea el que contenga la norma o regla que rija el caso cuestionado y, también, cuando se le dé un alcance que no tiene; por falta de aplicación de un dispositivo, siempre que éste deba servir de fundamento a la resolución de un negocio, en virtud de haber prevención al respecto, y, finalmente, habrá indebida interpretación de un artículo, si el juzgador se aparta de la esencia que contiene, tomándola en sentido diverso al que prevé, o contrario a los principios generales de derecho o a las reglas de la hermenéutica jurídica." (Tesis: sin número. Registro: 806834. Instancia: Cuarta Sala de la Suprema Corte de

AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.
20

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo LXX. Página: 3491).

A partir de la concepción del **debido proceso, legalidad y aplicación exacta de la ley**, ya relatados, es que se configura el análisis de constitucionalidad del amparo directo, bajo cuya perspectiva se verificara la regularidad del acto reclamado ya sea en suplencia de la queja o de estricto derecho.

DÉCIMO.- Antecedentes relevantes del caso.

1. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil diecinueve, *****, *****, *****, *****, por su propio derecho, compareció ante las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a demandar la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación en línea número *****, contenida en el oficio ***** de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Administración Desconcentrada de la Jurídica de Jalisco "2", con sede en Jalisco, por medio de la cual se confirmó la resolución contenida en el oficio ***** de treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", resolvió autorizar parcialmente la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de marzo del ejercicio dos mil dieciocho, con por un importe ** ***** * **** * *

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****21**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

***** * *** pesos, **/100 moneda nacional, recibida por esa Administración Desconcentrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 1 del juicio de nulidad).

2. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la referida demanda a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por lo que por acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia, admitió la demanda de nulidad en la vía ordinaria, misma que registró con el número ***** y, ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas (fojas 42 y 43 id.).

3. Por oficio número 600-31-06-01-2019-1671, signado por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica Jalisco “2”, con sede en Jalisco, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, presentado el catorce de junio de dos mil diecinueve, dio contestación a la demanda, acompañando a su contestación, el expediente administrativo, origen de los actos impugnados (fojas 55 a 130 del juicio de nulidad).

Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por admitida la contestación a la demanda; otorgándose a las partes, en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el

plazo para que formularan alegatos (foja 132 id.). Acuerdo que se notificó mediante boletín jurisdiccional el veinticuatro de junio del año en cita (foja 137 id.).

4. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte actora, presentó su escrito de alegatos (fojas 138 a 144 id.).

5. El doce de julio de dos mil diecinueve, se dictó la resolución correspondiente, en la se reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 145 a 159 id.).

Tal determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

DÉCIMO PRIMERO.- Razones del fallo reclamado y de los conceptos de violación.

1. Fundamentos del fallo.

En el considerando segundo del fallo, procedió de oficio, a examinar tanto la ausencia total de la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, como la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado.

Que de la resolución contenida en el oficio *****
***** de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a través de la cual el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Jalisco “2”, del Servicio de Administración Tributaria, resolvió el recurso de revocación ***** , confirmando a su vez la diversa contenida en el oficio ***** , de treinta de



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019

23

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

julio de dos mil dieciocho, por la que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “2”, autorizó parcialmente la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, de la cual, se dijo, se advertía que el funcionario emisor, fundó de manera correcta, suficiente y completa su competencia para suscribirla.

Que de igual forma, de la resolución contenida en el oficio ***** de treinta de julio de dos mil dieciocho, por la que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “2”, autorizó parcialmente la solicitud de devolución el impuesto al valor agregado, correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, se advertía que el emisor fundó de manera completa su competencia para emitirla.

Posteriormente, en el considerando tercero, analizó de manera conjunta los conceptos de impugnación primero y segundo, al considerar que éstos estaban estrechamente relacionados, los cuales se estimaron infundados.

Que era necesario precisar que la actora compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio ****
***** de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a través de la cual, el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Jalisco “2”, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, resolvió el recurso de revocación ***** ,

confirmando la diversa contenida en el oficio *****
*****, de treinta de julio de dos mil dieciocho, a través de la cual se autorizó la devolución parcial del impuesto al valor agregado solicitado por la actora, correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciocho, por lo que, dijo, se actualizaba el principio de litis abierta, prevista en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Que del análisis efectuado a la resolución recurrida, se observaba que la demandada estimó que el vehículo adquirido no era estrictamente indispensable ya que "...el contribuyente venía realizando sus actividades de manera cotidiana, antes de adquirir el vehículo..." determinando que "...es imposible llevar a cabo su actividad sin la indispensabilidad de realizarla mediante el vehículo automotor..." y, concluyendo que "...atendiendo a los fines de la actividad, que viene desarrollando, tal erogación no se encuentra vinculada con la consecución de las mismas...", por lo que era infundado lo esgrimido por la actora, en el sentido de que la autoridad no motivó por que el gasto efectuado, no era estrictamente indispensable para su actividad, pues, la enjuiciada sí expuso el razonamiento substancial por el que determinó que el vehículo adquirido no es estrictamente

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****25**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

indispensable para la consecución de la actividad de la demandante.

Que con la finalidad de resolver efectivamente litis, era necesario considerar lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece, en lo que interesa, que para acreditar el impuesto de que se trata, las erogaciones deben corresponder a bienes estrictamente indispensables para la realización de la actividad de la contribuyente, entendiéndose por estrictamente indispensables, aquellos que la Ley del Impuesto sobre la Renta, contemple como deducibles.

Que en ese sentido, los diversos artículos 104 y 105, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contemplan totalmente que las personas físicas podrán deducir las inversiones, siguiendo las mismas reglas que las deducciones autorizadas para las personas morales, siempre y cuando éstas sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se paga el impuesto.

Que por su parte, el diverso 36, fracción II, de la referida Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las personas morales podrán deducir las inversiones de los automóviles, hasta por un monto de ***** pesos **/100 Moneda Nacional; de lo que se desprende que al operar bajo las mismas reglas, las personas físicas pueden deducir las inversiones

realizadas en automóviles hasta por el monto autorizado, siempre y cuando resulte estrictamente indispensable.

Que el concepto de “gasto estrictamente indispensable”, es un concepto jurídico indeterminado, en virtud de que la Ley no establece claramente sus límites, derivado de la infinidad de supuestos que debió contemplar el legislador al momento de realizar el ordenamiento jurídico, siendo imposible definir cada uno de los hechos que pudieran tener tal condición, o bien, sentar reglas generales para su determinación, por lo que estableció un concepto amplio y genérico que debe precisarse por la autoridad al momento de su aplicación, atendiendo a los fines particulares de cada contribuyente y al gasto específico de que se trate.

Que debía considerarse que, el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, tratándose de personas morales o con actividad que desarrolle la persona física, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto, se dejaría de estimular la actividad, viéndose en consecuencia disminuidos sus ingresos.

De lo que se tiene que, los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquellos que



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019
27

resultan necesarios para las actividades de la contribuyente y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado de que se impediría la realización de la misma.

Que en conclusión, era dable afirmar que los requisitos que emiten determinar el carácter indispensable y, por ende, de deducible, se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como son:

- “1) Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad del contribuyente;
- 2) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;
- 3) Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;
- 4) Que debe representar un beneficio o ventaja en cuanto a sus metas operativas; y,
- 5) Que debe estar en proporción con las operaciones de la contribuyente.”

Que atendiendo a esos criterios, a juicio de los integrantes de la sala administrativa, la compra del vehículo “***

**** ** **** **** *** ***** ** ** *****

****”, no resultaba estrictamente indispensable para la consecución de su actividad que realiza, se constata que ésta no

se ve impedida sin la adquisición del referido vehículo, pues no se desprendía la forma en que éste impacta en la venta de tortillas.

Que no constituía obstáculo para arribar a esa determinación, el que, la actora argumentara que el vehículo le resultara estrictamente indispensable, en virtud de que con el:

"a) Transporta materia prima de la tortillería.

b) Lleva a los trabajadores a de sus domicilios al lugar de trabajo, lo cual es necesario para cumplir su jornada laboral, puesto que la operación comienza a las 4:00 a.m.

c) Realiza diligencias a la Ciudad de Guadalajara, para la compra de insumos como papel, bolsas de plástico y celofán y las refacciones necesarias para su funcionamiento.

d) Reparte tortillas a los diferentes puntos de venta y clientes que realizan pedidos a domicilio.".

Que señaló la actora que las referidas cuestiones se acreditaban con las siguientes documentales:

"1) Comprobante fiscal digital por internet, con folio fiscal *****
***** d 9 de febreros de 2018, emitido por
***** ** **** ** ***** S.A. DE C.V., por



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019
29

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

concepto de compra de 2 kilogramos de *****
*****.

2) Comprobante fiscal digital por internet, con folio fiscal *****
***** de 11 de abril de 2018, emitido por *** ***** ***** ***** que ampara la compra de ***** kilogramos de maíz.

3) Comprobante fiscal digital por internet, con folio fiscal *****
***** de 10 de marzo de 2018, expedido por ***** ** *** ***** S. DE R.L. DE C.V., por concepto de anticipo de compra de \$*****.

4) Comprobante fiscal digital por internet, con folio fiscal *****
***** de 1 de marzo de 2018, expedido por ***** ***** ***** por concepto de * *****,
* ***** , * ***** , * ***** , * ***** ,
* ***** , * ***** por un importe de \$*****.”.

Ello en virtud de que, dijo, del análisis de las referidas pruebas, así como los motivos en los que sustentaba el derecho a la devolución del impuesto al valor agregado acreditable, la sala consideraba que la impetrante no demostraba fehacientemente su

derecho a la devolución al no acreditar que la adquisición del vehículo resultara estrictamente indispensable.

Que si bien aportaba elementos para acreditar la compra de la materia prima necesaria para operar la tortillería, estos eran insuficientes para acreditar que el automotor adquirido, fuera utilizado para transportarla, pues la exhibición de los comprobantes fiscales, únicamente demostraba las operaciones realizadas con los proveedores, más no así, la utilización del vehículo para tal efecto.

Que en adición a lo anterior, no se deprendía que los viajes a la ciudad de Guadalajara, se realizaran mediante el vehículo que adquirió, puesto que no exhibía prueba alguna que administrativamente otorgara la certeza a ese órgano colegiado que dichas operaciones se realizaran mediante el vehículo automotor, ni que, de no haber realizado el gasto efectuado, se impediría a la actora llevar a cabo sus actividades.

Aunado a que la actora fue omisa en adjuntar documental alguna que demostrara que:

“* Tiene trabajadores a su cargo.

* Que su jornada laboral comienza a las 4:00 a.m. y que por lo tanto, es necesario el transporte del personal operativo a la tortillería.

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****31**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

* Que el vehículo comprado, sea utilizado para transportar a los trabajadores desde su domicilio, hasta el lugar de trabajo

* Que el automotor en cuestión, sea utilizado para la distribución de las tortillas en diferentes puntos, o bien, que mediante ella, se realicen pedidos a domicilio.”.

Concluyendo que la actora no logró acreditar fehacientemente que el vehículo en cuestión sea necesario para alcanzar los fines de su actividad; que de no producirse el gasto se hubieran afectado sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo; o bien, que le haya presentado un beneficio para sus metas operativas, ya que no aportó los medios de convicción idóneos que permitieran llegar a esa conclusión y, por lo tanto, no demostraba la indispensabilidad del gasto efectuado.

Que esto era así, no obstante que señalara que sus actividades se verían notablemente afectadas y disminuidas, ya que, como se había resuelto, no demostró que tuviera trabajadores a su cargo, ni tampoco que la camioneta fuera utilizada específicamente para el traslado de personas o insumos para llevar a cabo los fines de su actividad.

Que bajo esas premisas, se concluía que la actora no demostró la estricta indispensabilidad del vehículo adquirido y, por

lo tanto, el derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, dado que no aportó los documentos idóneos que sustentaran sus motivos, puesto que al afirmar la estricta indispensabilidad del vehículo adquirido, tenía la obligación de demostrarlo, por lo que al no hacerlo, resultaban infundadas sus pretensiones.

Que no constituía obstáculo el que la actora manifestara que la autoridad demandada en la resolución recurrida, concluyó que la operación por la cual se adquirió el vehículo no es estrictamente indispensable por ser un vehículo de “lujo”, ello en virtud de que se partía de una premisa falsa, puesto que el motivo de rechazo no fue porque se tratara de un vehículo de lujo, sino porque no fue acreditada la estricta indispensabilidad del gasto efectuado.

En razón de lo anterior, declaró infundados los argumentos de la actora, y reconoció la validez de la resolución impugnada, así como la recurrida en sede administrativa.

2. Argumentos en contra de lo decidido por la responsable.

Señala la quejosa, en su único concepto de violación, que la sentencia que constituye el acto reclamado, es ilegal por encontrarse indebidamente fundada y motivada, siendo violatoria del derecho humano de seguridad jurídica y de la garantía de certeza y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****33**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Constitucional, al confirmar la resolución impugnada; al considerar que la adquisición del vehículo fuese una inversión estrictamente indispensable, sin la cual sus actividades se verían considerablemente disminuidas.

Posteriormente, procede a señalar cuáles fueron los argumentos que se plantearon en los conceptos de impugnación identificados como primero y segundo de su demanda de nulidad; y transcribe lo resuelto por la sala administrativa en la sentencia que constituye el acto reclamado.

Señalando que de su análisis, puede advertirse que la responsable emitió su sentencia en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, en relación con las garantías de fundamentación y motivación y principios de certeza y seguridad jurídica, al considerar que la autoridad demandada sí expuso el razonamiento sustancial por el que determinó que el vehículo adquirido no es estrictamente indispensable para la consecución de la actividad de la quejosa, concluyendo la sala que atendiendo a la actividad que realiza, se constató que no se ve impedida a realizar su actividad, sin la adquisición del referido vehículo, pues no se demostró la forma en que éste impacta en la venta de tortillas.

Que además, la sala señala que fue omisa en adjuntar prueba documentales con las que se demostrara que tiene trabajadores, que la jornada laboral inicia a las cuatro de la

mañana; que el vehículo sea utilizado para transportar a los trabajadores y que el automotor en cuestión, sea utilizado para a distribución de las tortillas en diferentes puntos o entregas a domicilio; por lo que concluyó que no se acreditó la estricta indispensabilidad del vehículo adquirido y, por tanto, su derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, dado que no aportó los elementos idóneos que sustentaran los motivos.

Que como podrá advertirse, la sentencia reclamada, es contraria a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, en relación con lo establecido en el precepto 31, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, en referencia al principio de proporcionalidad tributaria, dado que la sala se limita a realizar un estudio sobre si la compra del vehículo automotor “*** **

*** ** . ** *

un gasto estrictamente indispensable para ella, ya que, incluso, de manera ilegal, se establece de forma excesiva requisitos que no se encuentran contemplados en las leyes fiscales vigentes, para así acreditar la estricta indispensabilidad del vehículo.

Lo que, dice, violenta el principio de proporcionalidad tributaria, ya que deja de atender sus capacidad contributiva y la repercusión que tiene la erogación de dicho gasto para el desarrollo de su actividad empresarial, debido a que solo se limita a considerar si la compra del vehículo automotor resulta un gasto indispensable o no, pero no advierte el impacto que genera en su

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****35**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

actividad y en consecuencia, la obtención de ingresos, considerando que toda actividad lícita que ella llegue a desarrollar con motivo de la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal, están enfocadas a reportar ganancias, las que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, están gravadas.

Que atendiendo a sus actividades, las mismas se consideran por la autoridad fiscal como una actividad empresarial, situación que es igualmente reconocido por la sala responsable, por lo que al ser una persona física con actividad empresarial, los ingresos que se obtengan en el desarrollo de su actividad se encuentran gravados para los efectos del impuesto sobre la renta, tal como lo dispone el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del cual se desprende, que el objeto del gravamen, es la obtención de ingresos que perciban las personas físicas derivados de actividades empresariales.

Que en razón de lo anterior, y en función a la mecánica del impuesto sobre la renta y al acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria, contrario a lo resuelto por la sala, se puede reconocer que una erogación es deducible, en la medida en que es idónea para generar ingresos al contribuyente, a fin de que el impuesto resultante sea acorde con la capacidad contributiva de este, es decir, gravar solo el provecho de la utilidad obtenida, con exclusión de los gastos y costos estrictamente indispensables, tendría como consecuencia un

aumento en la utilidad del contribuyente y, por tanto, también de la base gravable, ocasionando así una afectación.

Que como podrá advertirse, lo resuelto por la sala responsable es violatorio de sus garantías constitucionales de debida fundamentación y motivación, así como de los principios de certeza y seguridad y el de proporcionalidad tributaria, consagrados en los artículos 16 y 31, fracción IV, Constitucional, debido a que se considera que el vehículo automotor no es un gasto estrictamente indispensable, siendo omisa, en considerar, valorando las pruebas ofrecidas y las manifestaciones vertidas, que la inversión realizada en la compra del automotor se realizó con la finalidad de aumentar los ingresos de la tortillería, ingresos que en términos del artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fueron gravados para el pago provisional de dicho impuesto, sin que la autoridad fiscal haya objetado tal situación, ni comprobado que la aquí quejosa, hubiere incumplido con sus obligaciones fiscales.

Que la compra del vehículo de que se trata, es una erogación vinculada con la producción u obtención de ingresos, que son objeto del impuesto sobre la renta, erogaciones que tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han señalado que se tratan de deducciones estructurales, las que deben reconocerse por el legislador a fin de respetar el principio de proporcionalidad en materia tributaria, dado que

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****37**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

aminorar los ingresos brutos con los gastos en que se incurrió para generarlos permite identificar la renta neta de los causantes, que es la que debe constituir la base de la contribución de referencia; que partiendo de ello, se debía reconocer el carácter de indispensable de dicha erogación y en su momento el acreditamiento del impuesto al valor agregado que se realizó en cantidad de ***** pesos, al tratarse de un gasto estrictamente indispensable que genera la consecución de ingresos derivados de su actividad realizada.

Que de haberse analizado debidamente el objeto del gasto, las probanzas aportadas y las manifestaciones vertidas, se hubiera advertido que todo ello está enfocado en obtener mayores ingresos, al ampliar las actividades de la tortillería y permitir el buen funcionamiento del negocio, por lo que el no reconocer el vehículo automotor como una inversión y, en consecuencia, como un gasto estrictamente indispensable, se estaría violando el principio de proporcionalidad tributaria.

Cita como apoyo a sus argumentos, los criterios de rubros: "RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO "ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002)."; "RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN

DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO RELATIVO.”; “DEDUCCIONES ESTRUCTURALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA ADOPCIÓN DE UNA FORMA CORPORATIVA DE UNA PERSONA MORAL NO JUSTIFICA MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PROHÍBAN ABSOLUTA E IRRESTRICAMENTE GOZAR DE AQUELLAS.”; y, “RENTA. LA PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO RELATIVO NO ESTÁ CONDICIONADA AL HECHO DE QUE LAS EROGACIONES RESPECTIVAS SE VINCULEN NECESARIAMENTE CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL CONTRIBUYENTE.”.

Que de tales criterios, se desprende que el término estrictamente indispensable, debe interpretarse de acuerdo a los fines de cada empresa y del gasto específico de que se trate, debiendo tratarse de un gasto necesario para que se cumplimente en forma cabal sus actividades, de manera que de no realizarlo, estas tendrían que disminuirse o suspenderse; además que no debe entenderse en el sentido de que cada contribuyente puede dedicarse a un único giro, pues al ser el objeto del gravamen la obtención de ingresos, es evidente que los gastos en que se incurre para su obtención deben ser deducibles,



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019
39

independientemente de que el causante tenga más de una actividad.

Que atendiendo a lo establecido por los artículos 36, fracción II, 104 y 105, fracción II, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que las personas físicas podrán reducir las inversiones, siguiendo las mismas reglas de las deducciones autorizadas para las personas morales, siempre y cuando éstas sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos; se establece que las personas morales podrán deducir inversiones en automóviles, hasta por un monto de *****
***** * ***** *** pesos, por lo que al operar bajo las mismas reglas, las personas físicas pueden deducir las inversiones realizadas en automóviles hasta por el monto autorizado, siempre y cuando resulte estrictamente indispensable.

3. Solución en el caso.

Los argumentos anteriores, son ineficaces, y a fin de evidenciarlo, es necesario hacer la siguiente narración de antecedentes, los que se desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad:

1. Mediante resolución de treinta de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal Jalisco “2”, se resolvió la solicitud de devolución solicitada por la aquí quejosa, misma que se contiene en el oficio

***** , en la que, en lo que interesa, se

AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.

40

dijo: "...CONSIDERANDOS:...Respecto del punto número 1.- Aporta cédula digitalizada donde clasifica el 100% de las operaciones realizadas con su proveedor de Registro Federal de Contribuyentes... en la que relaciona un Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$*****, sin embargo de la revisión de su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) del período solicitado en devolución, se observa que manifestó haber tenido operaciones con su proveedor manifestando un Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$*****, y no así por el total de Impuesto al Valor Agregado manifestado en su papel de trabajo, tal como se le requirió en el punto 1 del requerimiento.

Ahora bien, de la revisión a la información contenida en la base de datos con que cuenta esta Autoridad, se observa que su proveedor de RFC... el cual le trasladó un Impuesto al Valor Agregado de \$*****, así mismo, del análisis realizado a la cédula que aportó el contribuyente, se advierte que el comprobante fiscal con folio fiscal *****

*****, se aprecia que se trata de la compra



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019

41

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de un “*** **

*****” , sin embargo esta Autoridad

determina que en el caso del acreditamiento del
Impuesto al Valor Agregado que pretende realizar
derivado de la adquisición de un vehículo
automotor resulta improcedente, debido a que
dicha erogación se considera que NO cumple con
las exigencias para ser considerado como gasto
estrictamente indispensable, en los términos que
a continuación se precisan:

Artículo 5, fracción I de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado vigente en 2018, que a
la letra dice:...

De lo anterior se desprende que el
Impuesto al Valor Agregado que se acrediten los
contribuyentes debe cumplir con la exigencia de
ser un gasto estrictamente indispensable para la
consecución de las actividades de la persona que
trate de acreditarse el Impuesto al Valor
Agregado que le haya sido trasladado por tal
erogación, de tal suerte que al no contar con tal
adquisición de bienes o servicio esté
imposibilitado para que su actividad se lleve a
cabo, ya que como se observa, el contribuyente

pretende considerar como una herramienta de trabajo, el uso del vehículo de lujo adquirido, operación de la cual se concluye que tal gasto o erogación de la adquisición de un vehículo automotor, en términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, NO se consideran estrictamente indispensables en los términos del artículo 105 fracción II, de la ley del Impuesto sobre la Renta Vigente para 2018, el cual señala:...

Ahora bien, del contenido del artículo 105 fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2018, se desprende que los contribuyentes tienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Ahora bien, del análisis del asunto que nos ocupa se dilucida, que el contribuyente venía realizando sus actividades de manera cotidiana, antes de adquirir el vehículo y es precisamente por lo que esta Autoridad determina, que es posible llevar a cabo su actividad sin la

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****43**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

indispensabilidad de realizarla mediante el vehículo automotor.

Entonces pues, resulta claro que la adquisición de un vehículo no es un gasto que le resulte estrictamente indispensable dado que atendiendo a los fines de la actividad, que viene desarrollando, tal erogación no se encuentra vinculada con la consecución de las mismas, en consecuencia, se determina que el mismo no es un gasto necesario para que cumpla de forma cabal con sus actividades, ya que de no realiza tal gasto no disminuyen, ni cesan sus actividades; de ahí que la adquisición del automotor de referencia no pueda considerarse como gasto estrictamente indispensable...

De ello se deduce que los gastos a que alude la fracción II, artículo 105, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2018, son aquellos que resultan necesarios para el funcionamiento de la actividad y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su actividad, de donde se infiere que en este supuesto, el legislador únicamente podría excluir

AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019.

44

erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existieran motivos de carácter jurídico, económico y/o social, que justificaran ese proceder.

Motivo por el cual esta autoridad considera que la compra de un vehículo: *** **

** **^

que una inversión para el contribuyente representa un gasto innecesario, por lo que el argumento del contribuyente de que son necesarias para realizar su actividad no se considera válido.

Por lo tanto, se determina que no le procede el acreditamiento en cantidad de \$***** correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del pago realizado a su proveedor con R.F.C... toda vez que como ya se mencionó en líneas anteriores, las erogaciones realizadas por concepto de compras del vehículo automotor... no resultan ser estrictamente indispensables para llevar a cabo su actividad y por lo tanto el Impuesto al Valor Agregado que deriva de ella no es acreditable, con fundamento en el artículo 105



AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019
45

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y Artículo 5 fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ambos ordenamientos vigentes en 2018...” (fojas 85 a 89 del juicio de nulidad).

2. Inconforme con esa determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, cuya resolución se contiene en el oficio número ***** de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que se determinó confirmar la resolución impugnada, al considerarse que no se acreditó la indispensabilidad del vehículo, cuya compra pretendió acreditar la aquí quejosa, para efectos del impuesto al valor agregado.

3 Determinación que los integrantes de la sala administrativa estimaron objetivamente correcta y, por tal razón, determinaron confirmar su validez.

Al respecto, se estima que es objetivamente correcto lo resuelto por la sala, en virtud de que, con las constancias que integran el juicio de nulidad, no se advierte que se haya acreditado la indispensabilidad del vehículo automotor adquirido por la aquí quejosa, para poder solicitar la devolución del impuesto al valor agregado, como lo pretende la quejosa.

En efecto tal como lo sostuvo la sala administrativa y la autoridad fiscal, no se acredita que los gastos realizador para adquirir el vehículo automotor *** **

*****, se haya realizado con la

finalidad de incrementar las ventas de la quejosa, respecto del giro de tortillería que explota.

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 1386/2004, el cinco de noviembre de dos mil cuatro, por unanimidad de votos, mismo que dio origen a la tesis número 2a. CIII/2004, de rubro: "RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO "ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002) .", estableció, lo que debe entenderse como estrictamente indispensable, en la ejecutoria en cuestión, en lo que interesa, dice:

"...Así, del contenido de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que todos los sujetos pasivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se ubiquen en este supuesto tienen la posibilidad de deducir entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Sobre la disposición contenida en la fracción I, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la doctrina ha señalado:

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****47**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“En el derecho fiscal, particularmente en una Ley relativa a un impuesto sobre la Renta, el criterio ‘estrictamente indispensable’ se erige rector el principio de proporcionalidad en materia impositiva respecto de las deducciones que los sujetos pueden efectuar. Mientras que indispensable o no toda erogación que efectúa una persona disminuye su capacidad económica, porque indefectiblemente reduce el haber patrimonial (...) .”

Como lo apunta el párrafo citado, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas en términos del artículo 31, fracción I, de la ley de la materia, así los gastos deducibles permitidos por la Ley a los sujetos del tributo en cuestión deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad empresarial; la concepción genérica de este requisito, que el legislador estableció en el precepto jurídico en comento, es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de

"estrictamente indispensables"; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el concepto de estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

De esta manera, por gastos se entiende las erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación.

El Diccionario de la Lengua Española, señala como significado de los conceptos estrictamente, indispensable y necesario, lo siguiente:

"Estrictamente: precisamente, en todo rigor de derecho".

"Estricto: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley".

"Necesario: que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder, dicese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo y que es

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****49**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

menester indispensablemente o hacer falta para un fin".

"Indispensable: adj. Que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable que suceda".

En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta en la doctrina, para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:

- 1) Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;
- 2) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;
- 3) Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;
- 4) Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas.
- 5) Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.

En tales condiciones, el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que de no realizarlo, se tendrían que suspender las actividades de la empresa, o éstas necesariamente disminuirían, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos y en su perjuicio.

De ello se sigue que los gastos a que alude la fracción I, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social, de donde se infiere que en este supuesto, el legislador únicamente podría excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****51**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

contributiva del sujeto, cuando existieran motivos de carácter jurídico, económico y/o social, que justificara ese proceder...” (lo subrayado es de este Tribunal).

Atendiendo a lo establecido en la ejecutoria antes transcrita, en específico a lo subrayado por este Tribunal, los gastos “estrictamente indispensables”, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la actividad que desarrolle el contribuyente y, sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su actividad, de tal manera que de no realizarlo, se tendrían que suspender las actividades, o éstas necesariamente disminuirían, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

Luego, en el caso, si bien es verdad que de las documentales que aportó la aquí quejosa al juicio de nulidad, de las que se advierten diversas facturas por la adquisición de insumos para la elaboración de las tortillas, a saber, dos mil kilogramos de harina de maíz conocida como “*** (sic) ***** ”; veinticuatro mil trescientos noventa kilogramos dos mil cuatrocientos treinta y nueve gramos de maíz; veinticuatro mil trescientos noventa kilogramos dos mil cuatrocientos treinta y nueve gramos de maíz; novecientos

ochenta kilogramos de de harina de maíz; once mil seiscientos noventa kilogramos de maíz; dos mil kilogramos de harina de maíz; y bolsas de plástico; así como diversas refracciones, sin desprenderse para que tipo de maquinaria son las refacciones que se citan en las respectivas facturas.

También lo es, que no existen elementos de prueba de los que se advierta que para la adquisición de tales productos, necesariamente la quejosa tuviera que trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o que los hubiera trasladado en el vehículo automotor de que se trata; ni mucho menos, demostró que tiene trabajadores y que necesariamente tuviera que pasar por ellos, a sus domicilios en el automotor de que se trata, para trasladarlos al domicilio en el que se ubica su negocio; pues evidentemente, con tales documentos, lo único que se acredita es la adquisición de insumos, y de diversas refacciones, pero no se advierte que, como se indicó, que el vehículo automotor que adquirió la quejosa, fuera estrictamente indispensable para la consecución de su actividades, o que éstas mejoraran con dicha adquisición, ni tampoco demostró que de no haberse realizado dicha adquisición, se verían obstaculizadas tales actividades al grado de que se impediría la realización de su actividad, y que de no realizarlo, se tendrían que suspender las actividades del mismo, o éstas necesariamente disminuirían, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma,

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****53**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos y en su perjuicio.

Por tanto, si no se acreditó dicha indispensabilidad, es objetivamente correcto lo que determinó la sala administrativa, de no reconocerle el derecho a la quejosa, para obtener la devolución solicitada, respecto del vehículo automotor señalado.

Pues, no basta que se sostenga que es indispensable, sino que debe demostrarse tal indispensabilidad, y la forma en que trascendería en su esfera, el hecho de que no se hubiere adquirido el mismo.

En razón de lo anterior, es que los criterios que cita en su demanda, lejos de beneficiarle, sirven para sustentar lo aquí determinado.

Así las cosas, ante lo infundado de los argumentos de la quejosa, lo que procede en la especie es negar el el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados,

Aplicación del artículo sexto transitorio de la ley de

Amparo en vigor. "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley."

En atención a dicho numeral se precisa que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado en esta resolución relativas a la interpretación de la anterior ley, resultan aplicables al

presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios judiciales cobran aplicabilidad.

Por lo que se refiere a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cabe destacar que no se propone motivo de inejercibilidad alguno, y lo ahí manifestado es genérico, en tanto que refiere que los conceptos de violación son infundados, ya que la recurrente se limita a expresar apreciaciones de carácter subjetivo, relatando la resolución que controvierte, pero que no endereza agravios en contra de la parte considerativo de la sentencia, empero, ninguno aporta elemento alguno que modifique o refrende las razones plasmadas en el presente asunto, y en esa medida es innecesario verter mayor estudio. Cobra aplicación al caso el siguiente criterio:

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tesis P./J. 26/2018 (10a.), registro 2018276.

**"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN**

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****55**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA

SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por

todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.”

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.- La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a

***** , en contra del acto y autoridad

que precisados quedaron en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo.

**AMPARO DIRECTO NÚMERO 239/2019****57**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos de los magistrados, René Olvera Gamboa, Jesús de Ávila Huerta y Gloria Avecia Solano, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados, firmando todos con la intervención de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

JMG/rhm.

La licenciada Jacqueline Molina González, hago constar y certifico que en términos de los artículos 8, 13, 14, 18 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El veintidos de noviembre de dos mil diecinueve, la licenciada Jacqueline Molina González, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de se trata de los datos de identificación del quejoso, acto reclamado y expediente de origen. Conste.